

# En torno al Chile que está siendo

## *Around Chile's being*

OSVALDO PUCCIO HUIDOBRO

*Embajador de Chile en España*

### RESUMEN

La vuelta de la democracia a Chile coincidió con el fin de la guerra fría, ganando rápidamente la transición a la democracia un gran apoyo y simpatía internacional. El nivel de consenso logrado por los gobiernos de la Concertación demostró que era posible derrotar a la dictadura por un camino de inclusión y sin rupturas, y romper lo que por décadas parecía una fatalidad del sistema político, su división en tres tercios.

Entre los grandes logros alcanzados en democracia, se pueden mencionar el eficiente manejo y desarrollo de la economía, las reformas y avances institucionales, incluida la promulgación de una nueva Carta Fundamental firmada por Ricardo Lagos, así como el más complejo y desafiante de todos, dar cuenta y avanzar efectivamente en el conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos.

**Palabras clave:** Transición democrática. Concertación. Derechos humanos. Reforma del Estado. Movimiento sindical.

### ABSTRACT

In Chile, the return to democracy coincided with the end of the Cold War. The emerging democratic transition received worldwide support and sympathy. The level of internal consensus reached by the Concertación demonstrated that it was possible to defeat dictatorship and, at the same time, avoid rupture, by following a path of inclusion and bringing an end to what seemed inevitable for decades in the political system: its division in three political blocks representing left, right and centre forces.

An unprecedented success in Chile's history was the broad consensus reached on economic policy, social development and institutional reforms that included the enactment of a new Constitution signed by President Ricardo Lagos. All of them represented different levels of complexity by accommodating somehow antagonising views. The most difficult and challenging of all initiatives was the recognition of truth and the need for justice that included reparation for the victims of gross human rights violations.

**Key words:** Democratic transition. Concertación. Human rights. State reform. Trade union movement.

Este año conmemoraremos veinte años, desde que las fuerzas coaligadas en la concertación por el NO lograran que, una sustantiva mayoría de chilenas y chilenos, afirmara aquella opción que daba curso a la posibilidad, un año después, de elegir democráticamente a un presidente de la República, acabando, por vía del voto popular, con una dictadura que se había entronizado en Chile, a través de un golpe de Estado que, no sólo fue el periodo de mayor injusticia y violencia en el país, sino que devino, en el plano internacional, en la representación más palmaria y simbólica de las dictaduras latinoamericanas, surgidas en la oleada que comenzó a mediados de los sesenta, con el derrocamiento de Joao Goulart en Brasil.

Los antecedentes más inmediatos del Chile que comienza su andadura democrática el año 90, son conocidos y fuente, probablemente por muchos años, aún de visiones encontradas, pasiones y memorias que polemizan e interpretaciones que habrán de discrepar. El Gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Salvador Allende —de cuyo nacimiento se cumplirán cien años en junio—; el golpe de septiembre de 1973, con su reguero de dolores y desgarros, y los largos 17 años de Gobierno de derechas, a través de una dictadura de impronta militar, cuyo juicio y herencia la sociedad chilena aún no logra asumir del todo, son antecedentes ineludibles —más allá de la perogrullada de la continuidad histórica— que es imposible soslayar, a la hora de inteligir y comprender a cabalidad lo que ha sucedido en Chile, desde la elección de Patricio Aylwin en adelante.

Pocas cosas, en nuestra vanidad provinciana, nos satisfacen más a los chilenos que es-

cuchar de otros o expresar nosotros mismos nuestra propia singularidad, la condición de caso extraordinario en la región, cuando no definitivamente único y, además, ejemplar. Esto, que en rigor no es del todo cierto, no obsta para que, de cara al desarrollo y evolución de ciertos procesos políticos, haya rasgos y momentos de originalidad que se destacan por su carácter propio y trasgresor de lo que, en teoría, debían ser reglas más o menos generales. Procesos como los de la Unidad Popular, el golpe de Estado, el devenir y desarrollo de la dictadura y las transformaciones llevadas adelante en el manejo económico, así como la manera como retornamos a la democracia, hacen que la tentación de subrayar la originalidad suela ser tan justificada como irresistible.

No es corriente en América Latina que una generación pueda mirar con orgullo, y aun con satisfacción, lo que ha sucedido en un periodo de algo más de tres lustros y que, al mismo tiempo, comprenda que no hay ni tiempo ni motivo para la autocomplacencia. No cabe duda que una mayoría larga de los que en Chile han estado involucrados, en el sentido más amplio, en el desarrollo de la sociedad pueden hacerse cargo, aun desde perspectivas políticas muy distintas, de ambas actitudes: de la satisfacción por lo hecho y, conjuntamente, de la conciencia de los desafíos por cumplir.

Pero vamos por partes y tratemos de desentrañar ambas caras de la moneda.

Al inaugurarse la recién reconquistada democracia, Chile podía mirar a los incipientes procesos democratizadores, en un número

significativo de países de la región. Contaba para sí con un apoyo y una simpatía internacional que cubría un registro ideológico, político, social y cultural, a nivel mundial, que tenía contadísimos precedentes. A ello contribuía, desde luego, el hecho de que Pinochet se había convertido en la encarnación simbólica de todo lo rechazable en el planeta, y también a que la coalición que comenzaba a gobernar era, a ojos de la política internacional, de un gran pluralismo y, en sus vínculos, contaba con apoyos significativos en EE.UU., cubría en Europa —dadas sus adscripciones internacionales— prácticamente el arco completo de los Gobiernos de esa zona, y la solidaridad internacional, con las fuerzas antidictatoriales, eran una extensa red de contactos y simpatías en todos los continentes.

Al mismo tiempo, sucedía a nivel internacional el más grande cambio en el panorama mundial desde el fin de la segunda guerra. El sistema del socialismo real imploraba de un modo en rigor inesperado, tanto para las mentes más lúcidas como para las más afiebradas de la guerra fría, que tocaba a su fin. Se generaba, así, una situación completamente nueva en la que la incipiente transición democrática chilena supo situarse de modo flexible e inteligente.

El fin de la guerra fría abrió o, dicho con exactitud histórica, reabrió una dinámica en las relaciones económicas internacionales que se había visto interrumpida, o congelada, con el triunfo de la Revolución rusa el 1917. El juego del mercado volvía a desarrollarse a nivel planetario y el que no se situaba en ese escenario y no jugaba de manera dinámica y

abierta en ese terreno, dejando de lado temores y prejuicios, iba a pagar costos altos por llegar tarde. Chile, aun a costa de cierta merma en su política regional, hizo uso de la simpatía y de los apoyos, con que contaba internacionalmente, para iniciar una política de inserción económica internacional que le significó, a la larga, devenir en una economía sólida, abierta, orientada al exterior y muy soberanamente asentada en los centros más dinámicos del mundo global.

En este punto, el nivel de consenso en el país, logrado por los Gobiernos de la Concertación, fue extraordinariamente alto, tanto a nivel de las fuerzas políticas como al del apoyo y aceptación ciudadana. En este marco, además, fue produciéndose un giro de sectores amplios de la empresa, que vieron a los Gobiernos de una alianza de centroizquierda cada vez menos como amenaza y, crecientemente, como una oportunidad eficaz y eficiente de representación nacional, con condiciones cosmopolitas y de aceptación en el mundo, cuyo desplante y aceptación jamás pudieron soñar en el Gobierno de Pinochet.

La exitosa y compartida inserción internacional del país fue un pie firme para las más complejas tareas que quería llevar a cabo la coalición, en la política interna.

La vuelta a la democracia había demostrado, no solamente que era posible derrotar a la dictadura por un camino de inclusión y sin rupturas que desgarraran nuevamente a la sociedad chilena, sino que era posible romper lo que, por décadas, parecía una fatalidad deseada del sistema político: su división en tres tercios, la derecha, la izquierda y el

centro que, al mismo tiempo, competían, se excluían y creían representar proyectos fundacionales que descartaban necesariamente al otro.

La superación de los tres tercios, que impidieron por décadas la cristalización política de la mayoría electoral progresista y fueron causa sustantiva del golpe del 73, significó, en la práctica, la conformación de una mayoría nacional nueva y novedosa de centroizquierda, que daba cuenta de una realidad nacional, surgida ya en los años veinte del siglo pasado. La derecha en el Chile moderno ha sido siempre minoría —la última elección presidencial la ganó hace más de cincuenta años... aunque por otros caminos se permitió una pausa de diecisiete—. Esa derecha, sin embargo, tuvo desde los inicios de la transición, un fortalecimiento electoral significativo y una legitimación ciudadana indiscutible, que se ha visto favorecida por un sistema electoral que la subvenciona y una prensa que le es casi incontrarrestablemente adicta.

De este modo, y visto desde la simple factualidad democrática de la existencia de un complejo juego de mayorías y minorías en el país, los avances de los Gobiernos de la transición han sido una compleja dialéctica de compromisos, avances graduales y reformas consensuadas.

En este aspecto, quizá una de las transformaciones culturales más importantes de Chile es que este hecho, que podría haber sido visto por la izquierda como una suerte de fatalidad táctica o como un imperativo de la «correlación de fuerzas», ha sido asumido por la mayoría de ella como un modo, no sólo

deseable, sino eficiente para llevar adelante una política transformadora.

Desde el punto de vista de la cultura tradicional de la izquierda, que ha tenido una no menor hegemonía en el proceso democrático, y también de parte del centro político, que se adscribió en los sesenta a los cambios más radicales, la transición fue el espacio en el que, en su conceptualidad y su praxis, asumieron el gradualismo de la transformación como la vía natural y mejor de hacer política.

Dicho de otro modo, los empeños de Frei Montalvo, en los sesenta, y de Allende, en los setenta, de articular en Chile el binomio libertad e igualdad, en la forma como Bobbio debate estos conceptos, ha encontrado en la transición el cauce democrático y de mayoría que hacen posible su realización.

Posiblemente la tarea más difícil, a la que se hubo de abocar la transición desde sus inicios, fue la de dar cuenta de las situaciones generadas por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como una política de Estado.

Hay, sin duda, otros aspectos de este periodo de gran complejidad y éxito, como el manejo y desarrollo de la economía, transformando, en palabras de Manuel Castells, un modelo «autoritario, liberal y excluyente» por uno «democrático, liberal e incluyente». Uno que excluyó a la gran mayoría de los beneficios del crecimiento por otro, de signo opuesto, que ha conseguido incluirlos sustantivamente. Ello se hizo asumiendo, en gran parte al principio, el sistema económico instaurado por la dictadura, para luego ir

reformándolo y ajustándolo gradualmente, con un enfoque centrado en el plano social. La reducción de la pobreza pasó, entre 1990 y 2006, de un 38.6 por ciento a un 13.7 y la indigencia, de un 13 por ciento a 3.2, un logro sin precedentes en la región. A ello se puede agregar que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Chile ocupó el lugar 38 en el Ranking de Desarrollo Humano, entre 180 países, siendo superado por Argentina (36) y Barbados (31), dentro de América Latina y el Caribe. Pero no sólo hubo un cambio de sello, sino un evidente mejor manejo en la economía al que hubo durante la dictadura, como demuestran casi todas las cifras y ejemplifica el hecho de que el PIB del 2000 ya duplicaba el del 89 y, en el 2005, había crecido un nuevo 21 por ciento. Entre 1989 y el 2005 se duplicó, a su vez, el ingreso per cápita, llegando a 12.000 dólares en «paridad de poder adquisitivo».

Un capítulo propio de la transición lo constituyen las reformas y avances institucionales, hechos durante el periodo. Ellos se enmarcaron, durante quince años, en una Constitución Política, que mantuvo la rúbrica del dictador y a la que se le fueron introduciendo reformas, tras complejos y trabajosos procesos de negociación con la oposición que, dado el quórum requerido por la propia Carta Magna para su reforma, era de singular dificultad. Sólo en 2005, tras una larga negociación, fue posible que Chile contara con una Constitución con legitimidad parlamentaria, que asumía un número importante de cambios y de reformas institucionales democráticas, que reponía claramente la primacía de las instituciones civiles y legitimadas y que,

lo que simbólicamente era muy importante para Chile, era firmada por Ricardo Lagos, como presidente constitucional.

En este plano y junto con ello, los Gobiernos de la Concertación impulsaron, ya desde el Gobierno del presidente Aylwin, muy diversos empeños de modernización de la gestión pública y de reforma del Estado. Ellos fueron, desde políticas públicas e iniciativas legales de descentralización y desconcentración de Estado, hasta avanzados desarrollos de Gobierno electrónico o participación ciudadana.

Pero como dijimos, el aspecto más complejo de la transición fue dar cuenta del desafío que significaba asumir, como país, la violación sistemática de los derechos humanos. Fue justamente en este plano —donde hubo la necesidad de cuidar los equilibrios, hacer gala de prudencia y generar más actos y avances efectivos que retórica— donde la Concertación y sus gobernantes demostraron mayor talento y pericia, talento y pericia que sólo es explicable desde la convicción profunda y acendrada de que la buena solución de ese desafío constituía, al final de cuentas, la piedra angular sobre la que habría de sustentarse todo el edificio transformador que esa propia coalición había asumido como tarea.

En los avances en este plano concurren sectores muy diversos de la sociedad —también de los que habían sido parte de la propia dictadura— junto con la acción ejemplar y consistente de las víctimas y unas políticas muy claras y activas de cada uno de los Gobiernos de la Concertación.

Con certeza, hoy se puede decir en Chile que son sectores muy minoritarios los que no han querido asumir una verdad, socialmente aceptada, que reconoce las atrocidades cometidas, y se puede afirmar, también, que no hay un solo grupo, que haya visto conculcados sus derechos, que no haya recibido un reconocimiento público y simbólico, por parte de las máximas autoridades del Estado. También ha sido importante que los principales responsables materiales de la represión hayan sido, prácticamente todos, judicializados, cuando no condenados.

Es la profundidad de los cambios acontecidos en Chile desde el 90 en adelante los que explican, no sólo el hecho de que la coalición de Gobierno haya ganado las trece elecciones generales realizadas en ese periodo, sino, paradójicamente —y este es el otro lado de la moneda— también el creciente nivel de expectativas y aspiraciones de la ciudadanía, que espera grados mayores de satisfacción de intereses y necesidades que tienen también que ver con un salto en las condiciones actuales de la sociedad.

Desde luego, esta transformada sociedad chilena precisa de cambios significativos en su propia institucionalidad, cambios que den cuenta de los requerimientos de mayor inclusión y participación de territorios y ciudadanos, que hoy no encuentran vías convocantes y expeditas de influencia e incidencia en el devenir colectivo. Un sistema electoral que excluye sectores importantes, un centralismo que sigue siendo muy fuerte o una relación de desequilibrio entre los poderes de Estado, son factores que obligan a pensar en nuevos acuerdos y más amplios consensos,

fundados en los intereses generales, más allá de los, por legítimos que sean, particularísimos partidarios. Estas deficiencias son causa también de un sostenido y, por ratos, alarmante desapego de la ciudadanía de los procesos políticos, haciéndose especialmente notable en los tramos erarios más jóvenes.

Urge también acometer una mejora cualitativa en lo que, sin duda, es un notable déficit del proceso de transición: dotar a Chile de una prensa plural, no sólo en el sentido de las adscripciones ideológicas, sino en el tipo de temas, ocupaciones y preocupaciones que refleja.

Largo sería analizar la situación de la prensa en Chile donde, en democracia, se puede hablar, sin temor a equivocarse, de un proceso creciente de unilateralización ideológica —en la escrita es casi completo— junto con una banalidad vulgarizante de la televisión, que marca cada vez más el sello de este medio. Probablemente sólo la radio responde a criterios aceptables de pluralidad de orientaciones y temáticas.

Del mismo modo está pendiente la construcción de un movimiento sindical fuerte y moderno que, no sólo supere un cierto reivindicacionismo arcaico, sino que dé cuenta de la inmensa modernización productiva experimentada por el país y sea, por tanto, factor de un proceso de desarrollo que tienda tanto al crecimiento como a la distribución justa y dinámica de él.

El país se encuentra, luego de un periodo de cambios profundos y positivos como pocas veces en su historia, en el umbral de un

salto al desarrollo, que lo coloque definitivamente en el grupo de países que cumplen todos los requerimientos de una sociedad justa, moderna, democrática y materialmente desenvuelta. Ello dependerá posiblemente menos de las dinámicas de la economía, que de por sí han demostrado una velocidad y un ritmo admirables, y mucho más de la capacidad de la política de dar cuenta de la magnitud del desafío. Y aquí hay, por ratos, señales que obligan a la aprehensión. Los sectores más radicales de la derecha, así como grupos dentro de la propia Concertación, han ido adquiriendo formas y maneras de hacer política en que los intereses particularísimos —no pocas veces rigurosamente individuales en un perverso maridaje con la prensa— son puestos por delante de las posibilidades y búsquedas de acuerdos, que permitan ampliar los espacios de la democracia, acordar los

cambios institucionales necesarios y generar un clima de concordia, que sea el clima nacional necesario para el desarrollo colectivo.

La tendencia al cambio y la voluntad de dar el brinco lo encarna, casi como una metáfora en sí misma, la presidenta Bachelet, que es continuidad de la enorme tarea de cambio de estos años, pero también figura en la que, también sectores de oposición a su Gobierno, ven un factor determinante de ese clima indispensable para ir más allá.

El debate al que nos invita la Revista Quórum de la Universidad de Alcalá contribuye, justamente, al diálogo inteligente, informado, plural que Chile necesita consigo mismo y con aquellos que se sienten cercanos y comprometidos con el destino de mi país y por ello es tan urgente como necesario.